

¿QUIÉN GANÓ Y QUIÉN PERDIÓ EN LAS ELECCIONES?

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

AVANZA BA LA NOCHE SOBRE LAS INSTALACIONES del Instituto Federal Electoral y, con ella, los rostros se iban transformando. Las expectativas y la relativa tranquilidad que habían caracterizado los trabajos durante el día comenzaban a desaparecer y se imponían una seriedad y una preocupación que ya a las tres de la mañana del lunes, cuando aún no se conocían los resultados de una sola casilla electoral, se habían convertido en franca irritación. Para entonces, ese 18 de agosto, una sola cosa era cierta: estábamos, otra vez, frente a la realidad del carro *completo* y una pesada losa parecía haber caído sobre el conjunto de la oposición real.

A escasas 48 horas de los comicios y aún sin los resultados oficiales es difícil responder a las dos preguntas obligadas: ¿Cuál es el futuro de la transición? ¿Quién ganó y quién perdió este 18 de agosto?

No cabe duda de que la elección, como muchos habíamos previsto, fue muy compleja. No solamente se confrontaría con la realidad una nueva legislación que no se caracteriza precisamente por su simplicidad, sino que también estaba en marcha un operativo político de muy largo alcance que implicaba, para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la posibilidad de refrendar a través del voto la puesta en marcha, a lo largo de tres años, de una nueva estrategia de desarrollo.

En las semanas previas a las elecciones se manejaron tres hipótesis básicas sobre lo que ocurriría el 18. Una era francamente irrelevante: el **PM**, se decía, sólo podría ganar perdiendo. Conociendo al sistema y al partido oficial esa posibilidad resultaba inaplicable a la realidad. El sistema político definitivamente no estaba apostando a su destrucción sino a su consolidación y el partido tiene la función de legitimar esa política a través del voto. Pero el problema que se le presentaba al priísmo era cómo realizar esa labor legitimadora: una posibilidad residía en el estricto respeto del voto y dejar a los electores la decisión de mostrar hasta qué grado llegaba la aceptación de la estrategia salinista, sabiendo de antemano que, gracias a los resultados económicos de la actual administración

y al éxito del programa nacional de Solidaridad, esos rendimientos serían altos. Pero allí existía una posibilidad seria de que se perdieran posiciones políticas no estratégicas.

La otra hipótesis era lograr un triunfo rotundo que le permitiera al partido oficial alcanzar una cómoda mayoría legislativa de forma tal que no se dependiera de los acuerdos con la oposición, siempre tan volátiles en los tramos finales de un periodo presidencial, para las trascendentales reformas legislativas que se llevarán a cabo en la siguiente legislatura. Para ello, no eran suficientes una elección abierta y en la que existiera un cierto margen de maniobra para la oposición. Había que desempolvar la vieja maquinaria priísta y ponerla a funcionar.

Si nos atenemos al periodo de preparación de las elecciones, ambas estrategias de trabajo se prepararon en forma simultánea. Por una parte, se promulgó una legislación electoral que, independientemente de su complejidad, resulta un indudable avance respecto a las anteriores. Por otra, la conformación de las listas de diputados y asambleístas del **PRI** permitía adivinar que se esperaba una elección disputada, ya que muchos de los hombres y mujeres destinados a dirigir la labor legislativa del tricolor se encontraban resguardados de las inclemencias del voto en las listas de plurinominales. Pero por otra, el **PRI** **realizó**, **alentado** por distintos sectores gubernamentales, su propia campaña interna basada en una estrategia que camina, la mayoría de las veces, por el filo mismo de la legalidad. Los promotores del voto priísta que confeccionaban el padrón de ese partido se confundieron con los empadronadores del **IFE**; la estrategia clientelar que, como bien dice Marcelo Ebrard, ya no desarrolla el partido directamente, queda en manos de las autoridades a través de programas de apoyo; si bien el retraso en la entrega de credenciales pudiera haber sido comprensible, no lo es que los plazos se alargaran y no se entregaran las copias de las listas nominales de electores a los partidos para que las pudieran cotejar (éstas se

entregaron, en el mejor de los casos, a altas horas de la noche del sábado 17 de agosto, y se descubrieron innumerables anomalías); pocas horas antes de las elecciones se designó a unos coordinadores de distrito cuyas funciones son bastante superfluas en el papel pero que recuerdan a los tristemente célebres auxiliares de la pasada legislación electoral y que eran los responsables de las mayores irregularidades.

Si nos atenemos a los hechos, en los días previos a los comicios se decidió que la estrategia por seguir era, por sobre todas las cosas, garantizar la mayoría legislativa propia, pero violentando lo menos posible la legalidad. Sin embargo, cuando un aparato como el priísta es lanzado al ruedo el control se vuelve improbable y los objetivos estratégicos se convierten a la subordinación táctica que les imponen los intereses sectoriales e individuales, incluyendo, claro está, los golpes internos en pos de la sucesión presidencial. Así se llegó al carro *completo*: en todos aquellos distritos y estados que constituían un problema real (y que en términos reales no eran determinantes para la elección global: 10 distritos en el **DF**, las elecciones de gobernador y las federales en Guanajuato y San Luis Potosí, las federales de Yucatán, Michoacán y Baja California) se impuso la vieja maquinaria priísta, conducida por los mismos operadores de antaño y recurriendo a muchos de los vicios que ya se creían acabados con la reforma política y el fin del partido casi único proclamado el 8 de julio de 1988.

Sin embargo, el triunfo abrumador del 18 de agosto ha puesto al **PRI** ante un problema de gobernabilidad distinto pero no menos conflictivo que el que trataba de evitar. Tendrá una cómoda mayoría relativa, en la que las necesidades de alianzas serán mínimas y disfrutará con ello de las posibilidades de gobernar con la suma del poder público. Con estos resultados se perderán, así lo imponen los hechos, los difíciles pero importantes contrapesos políticos que se construían a partir del 88 y con ello pierden

peso e influencia los funcionarios que durante estos tres años se encargaron de conformar la hegemonía priísta no a través de la imposición sino de la búsqueda de un nuevo consenso, como Manuel Camacho Solís.

Y se fortalecen los sectores, particularmente del equipo financiero, que tanto énfasis pusieron en aquella frase de Carlos Salinas de Gortari en Moscú respecto a que no se podía realizar una reforma política sin una auténtica reforma económica previa. En última instancia ese es el mensaje que nos dan estos resultados: la reforma política debe ser frenada -aun con costos internos dentro del partido y el grupo dominante- para que la nueva estrategia económica pueda consolidarse sin mayores sobresaltos políticos. Y así será porque con la cómoda mayoría legislativa que tendrá el PRI, no se requerirá de la formación de consensos sino de firmeza en el mando, de disciplina y, sobre todo, de poner en marcha una estrategia de gobierno que pueda reemplazar como interlocutores válidos a los partidos políticos por los grupos sociales organizados. No en vano T.J. Pemppler se ha convertido en el autor de cabecera de muchos funcionarios: lo importante en las *democracias diferentes* son los derechos civiles de prensa, de reunión, de organización de los partidos de oposición y no tanto la orientación del voto ni mucho menos la alternancia en el poder.

Por eso, la crisis de gobernabilidad se plantea en otro sentido: no en la necesidad de encontrar consensos partidarios sino de establecerlos con amplios sectores sociales. Y si nos atenemos a los resultados electorales y a las reacciones sociales que estos produjeron, el gobierno ha logrado mantener esos consensos, a través del programa Solidaridad, con los sectores más desprotegidos de la población y, por medio de la nueva estrategia económica, con las cúpulas económicas del país. Las clases medias que comienzan a lograr mejoras en su situación económica permanecen a la expectativa y entre ellas persiste un sector que aún es minoritario y que esta vez está preocupado por la real reforma política y por la existencia de una democracia formal y no diferente, y que resulta el gran desplazado, por ahora, de las decisiones gubernamentales. El desafío gubernamental es mantener ese consenso social actual en las capas altas y bajas de la sociedad,

evitando que las medias se contagien de las exigencias de liberalización política, por lo menos durante los próximos tres años, para cuando se estima que la nueva estrategia de desarrollo estará lo suficientemente consolidada como para poder proceder a la liberalización sin poner en peligro la estabilidad política. Ése es el futuro de la transición: aceptar esos plazos o trabajar para acortarlos.

Pero, a corto y mediano plazo los resultados del 18 de agosto imponen otras exigencias a los diversos actores políticos: El PRI ha demostrado, como bien dijo Raúl Trejo Delarbre, que supo aprender a perder en 1988 pero no ha sabido aprender a ganar. Los sectores más tradicionales y ortodoxos del partido, que han vuelto a levantar cabeza en esta ocasión, será ahora muy difícil que vuelvan al ostracismo político. Y esos sectores, no lo olvidemos, se oponen tanto a la liberalización real de la vida política como a la de la economía. Tarde o temprano volverán a entrar en contradicción con el salinismo que ahora los ha utilizado.

El PAN deberá redefinir su estrategia global. Pese a que en el ámbito nacional (cuando todavía contamos sólo con resultados preliminares) logró un aumento de su votación respecto a las elecciones de 1988, perdió, salvo en Baja California, y en elecciones pletóricas de irregularidades (Guanajuato, San Luis Potosí, distritos 1, XVI y XXXVI del DF, Mérida) muchas de las posiciones clave que esperaba ganar o mantener para preparar su propia transición hacia el 94. En este sentido, su consolidación como segunda fuerza política del país no deja de tener, para el partido de Gómez Morín, un sabor muy amargo. Paradójicamente, por la radicalidad del carro completo, el PAN obtendrá un beneficio: su fracción parlamentaria será mucho más capacitada que la del PRI, que dejara fuera a muchos de sus cuadros, inscritos en las listas de plurinominales, reducidas drásticamente por la radicalidad del carro completo.

El PRD debe replantear su futuro si es que desea tener alguno. Su caída electoral no puede explicarse sólo con base en las irregularidades. Y es que el grupo de la izquierda radical que acompaña a Cuauhtémoc Cárdenas no ha aprendido nada de la historia y ha logrado que el cardenismo dejara de ser una importante posibilidad de centro izquierda para volver a la proporción histórica de

votos de la izquierda, que nunca sobrepasó el 10%. La necesidad de un verdadero partido de orientación socialdemócrata vuelve a ser el desafío de ese sector político que, en parte y ante el fracaso, puede optar también por una mayor cerrazón y aislamiento electoral y político. Si así ocurriera, la ruptura del PRD sería inevitable.

Para los demás partidos, salvo algunas excepciones, no hay futuro: el PFCRN seguirá jugando como el comodín del sistema cuando así lo requiera, y los que sirvan conservarán su registro a través de compromisos con las autoridades. La única sorpresa de esta elección, el Partido Ecologista Mexicano, comenzó a enfrentar, a sólo 24 horas de los comicios, su primera gran crisis interna. Si se impone el sector de Jorge González Torres sobre el de Gabriel Sánchez Díaz, la suerte también estará echada para los ecologistas: González Torres significa el liderazgo caciquil de un sector corrupto y alejado por completo de las expectativas del partido verde moderno, liberal, democrático que representan los jóvenes que lograron su importante porcentaje electoral en el DF, organizados alrededor del grupo de Sánchez Díaz.

Y sin embargo, en este panorama de crisis cruzadas, queda un elemento que no se puede olvidar: fue una votación, en términos generales, realizada en forma pacífica, con una participación que rebasó, en muchos sentidos, las expectativas y que demuestra que la sociedad no es un mero espectador del tinglado político. Ese factor tendrá que ser tomado en cuenta, incluso por quienes ven este triunfo (o esas derrotas) como definitivas, tanto dentro como fuera del gobierno y del partido oficial

